

# Elecciones

## UN RETORNO EN CUESTIÓN. ELECCIONES PRESIDENCIALES 2012

• Luz Lomelí Meillon\* •

Por los interrogantes que plantean para el futuro del país, entre las noticias relevantes sobre las elecciones mexicanas celebradas el 1 de julio de 2012, sobresalen tres: el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República; el cuestionamiento acerca de la legitimidad y la validez de la elección presidencial, y la novedosa e intensa participación juvenil. Los tres acontecimientos son de suma importancia. En el momento de escribir este texto, a escasos 20 días de la celebración de los comicios, la evolución de cada uno induce a elegir al primero como tema central y a enunciar con brevedad los otros dos.

---

\* Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel I; doctora en Ciencias Sociales (CIESAS, Occidente), y profesora e investigadora desde hace 20 años en programas académicos de licenciaturas y posgrados del ITESO. Ha participado como miembro activo en varios grupos de investigación, de carácter nacional e internacional. Su línea de investigación es instituciones, actores y procesos políticos.

La controversia sobre la elección presidencial tiene como punto de partida el origen, el monto y el uso del dinero empleado por el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, durante su campaña. El litigio inicia con la demanda presentada en su contra por superar el monto que permite la ley, por el empleo de dinero público de estados gobernados por el Revolucionario Institucional, por el posible nexo con el narcotráfico y por utilizar el financiamiento para “la compra de votos”. Por su parte, el PRI exige al Instituto Federal Electoral (IFE) una pronta respuesta a sus demandas en contra de la coalición de las izquierdas partidarias por ocultar financiamiento proporcionado por las organizaciones “Honestidad Valiente” y “Austeridad Republicana”. El proceso está en curso, los tiempos señalados por la ley para la resolución de las impugnaciones todavía no terminan, por lo que es prematuro pretender analizarlo.

La tercera cuestión es la magnitud y la intensidad de la participación juvenil en el espacio público y la forma innovadora de hacer escuchar su voz: el uso de las diversas herramientas que ofrece internet, las redes sociales y el movimiento #YoSoy132 que se extendió a lo largo del territorio nacional. Las demandas de este último se expresaron en las consignas: “No a la imposición de Peña Nieto” y “No al oligopolio televisivo”. El uso de internet obligó a los candidatos a abrir sus propios sitios en las redes sociales, y a mantener un constante diálogo con los internautas, en su mayoría jóvenes. De aquí en adelante será una práctica obligada de los políticos y los gobernantes, y una forma común de participación política, sin importar la edad, el carácter de ciudadana/ciudadano, de nacional o extranjero. No es una herramienta nueva, su uso es habitual dentro del ámbito político. No es la primera vez que los jóvenes participan y desean influir en dicho ámbito. La novedad estriba en que, en esta ocasión, se cambió para siempre la forma de participación política de los mexicanos y mexicanas, y se abren expectativas

sobre su potencial. Sin embargo, aún es muy pronto para evaluar su alcance actual y, al parecer, es poca su influencia sobre el tema que nos ocupa. Los analistas de este movimiento afirman que trasciende lo electoral; su futuro depende de ello. Pero no se puede negar que su detonador fue el proceso electoral de 2012, y que el sufragio es la base de la institucionalidad política que pretende ser democrática.

El regreso del PRI a “Los Pinos” es una victoria anunciada por las casas encuestadoras y los comentaristas televisivos. ¿Las encuestas mintieron y pretendieron sesgar las preferencias de los electores? Es posible que algunas de ellas lo hicieran; pero es difícil suponer que las empresas más serias y reconocidas tuvieran esa intencionalidad, porque va en contra de sus intereses y de su propia sobrevivencia, puesto que su principal capital es su credibilidad. Lo más probable es que se equivocaron en la selección de la “muestra estadística” y con ello afectaron la validez de su representatividad. Una de las posibles causas de este error generalizado es que no se tomó en cuenta a los núcleos pro-López Obrador que se establecieron en casi todos los municipios del país. Éstos se formaron a partir de las giras realizadas por el líder izquierdista durante los años previos a la elección presidencial. En cuanto a la promoción de la imagen televisiva de Enrique Peña Nieto, también data de los años previos a la elección, hecho que difunde entre la población el nexo entre Televisa y el candidato del PRI. Las ya citadas consignas del movimiento #YoSoy132 son evidencias de la propagación de este nexo, que se asume como cierto.

## 1. Los competidores

Las cifras electorales y el resultado de los comicios de 2012 adquieren significado al situarlos dentro del contexto sociopolítico donde se emite el sufragio. La mirada sobre él puede acotarse al presente o divisar

una trayectoria más amplia. El primer caso permite identificar a los competidores, y el segundo ayuda a entender cuáles son las fuerzas políticas que, por medio de los candidatos que postulan, participan en esta contienda electoral. No se trata de conocer su historia, sino de comprender a las fuerzas que representan los aspirantes a la Presidencia y entre las que se distribuyen los cargos públicos. La pregunta sobrepasa a los partidos políticos porque dentro de ellos siempre existen grupos y fracciones que compiten, establecen acuerdos o provocan escisiones. Por ello, la selección interna de los candidatos tiene una especial importancia, y para el ejercicio del poder es determinante cuál o cuáles de los grupos internos logran el triunfo electoral.

En síntesis, se puede afirmar que Peña Nieto representa, de manera especial pero no exclusiva, al “Grupo Atlacomulco”, uno de los más fuertes dentro del PRI, reconocido tanto por su habilidad política como por ejercer el poder con “mano dura”. La tradicional disciplina y capacidad negociadora de los priístas contrasta con lo acaecido en el Partido Acción Nacional (PAN). La heterogeneidad de los personajes que apoyaron a Josefina Vázquez Mota en su postulación como candidata de su partido, su toma de protesta en un estadio semivacío y la renovación de su equipo de campaña durante el trascurso de la misma, parecen indicar que no tiene el sustento de un grupo panista definido. También lo confirma la declaración de un miembro de su equipo de campaña, Octavio Aguilar Valenzuela, quien afirma que la candidata “fue traicionada”, “todos la dejaron sola”.<sup>1</sup> Andrés Manuel López Obrador representa a los grupos de la izquierda que postulan un Proyecto de Nación Alternativo (al vigente); por eso, sus adversarios lo consideran el ala más radical de la izquierda partidista. Gabriel Quadri de la Torre representa los intereses de Elba Esther Gordillo, líder na-

---

<sup>1</sup> “Josefina Vázquez Mota ‘Traicionada’”, en *Vanguardia*, 6 de julio de 2012.

cional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y líder de facto del Partido Nueva Alianza (Panal).

## 2. El cómputo distrital

Los resultados de las elecciones federales de 2012 corresponden al cómputo distrital reportado por el IFE. Como se indicó, todavía no finaliza el proceso electoral, pues se encuentra en la etapa de resolución de las impugnaciones presentadas por los partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por esta razón, pueden cambiar las cifras, pero no se prevén cambios sustanciales, dada la experiencia en otras ocasiones en las que se impugnó la elección presidencial; sin embargo, puede verse afectada la composición de las cámaras legislativas. De acuerdo con las cifras disponibles, los cargos federales se distribuyeron de la siguiente manera:

En la elección presidencial, según el cómputo distrital, Josefina Vázquez Mota se sitúa en el tercer lugar con el 25.40% de los sufragios; su partido consigue 38 asientos en la Cámara de Senadores y 114 en la de Diputados. Enrique Peña Nieto obtiene la denominación de candidato electo con el 38.21% de los votos; el PRI adquiere 52 curules para senadores y 207 para diputados. Al candidato de la izquierda (la coalición Movimiento Progresista), Andrés Manuel López Obrador, se le reconoce el segundo lugar con el 31.59% de los votos. Las fracciones parlamentarias de esta coalición se integran de la siguiente forma: El Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 22 senadores y 101 diputados, el Partido del Trabajo (PT) con cuatro senadores y cuatro diputados y el Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, con 16 diputados. El candidato de Nueva Alianza, Gabriel Quadri, alcanza el 2.29% de los votos y su partido diez diputaciones. También el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tiene presencia en la Cámara con diez diputados.

### 3. El sentido del voto

Una de las primeras preguntas que se plantean sobre los resultados electorales es el porqué de los mismos, es decir, las motivaciones de los electores para votar en el sentido en el que lo hacen o la actuación de los partidos y de sus candidatos. En 2012, al igual que en los comicios presidenciales de 1988 y 2006, el tema que resalta es el proceso electoral: las irregularidades sobre alguna o algunas de sus etapas y, con ello, la autenticidad de los resultados. Respecto a la orientación del sufragio, sobresale lo acaecido con el PAN y el PRI como sucesivos detentadores del gobierno federal. La segunda cuestión es el apego a la ley por parte de los partidos políticos o de las autoridades electorales y, en consecuencia, la validez de los resultados; aquí el interés se centra en el PRI y el PRD, que en esta ocasión participan en alianza electoral con otros partidos: PRI con el PVEM, y el PRD con el PT y el Movimiento Progresista.

Hace 12 años (2000), “Sacar al PRI de los Pinos” era la principal consigna que orientaba los votos en favor de Acción Nacional, con la expectativa de un “cambio” con significados distintos para diversos segmentos de la población. Otro factor que contribuyó a la pérdida de los comicios presidenciales, presidida por un progresivo declive de la votación en favor del Revolucionario Institucional, son los conflictos intrapartidistas y la agudización de sus crisis. No se pretende reseñar los múltiples factores que dieron lugar a la primera alternancia en el Poder Ejecutivo federal, sino evidenciar aquellos que invierten la votación de los partidos que, hasta la fecha, protagonizan las alternancias en la Presidencia. En la competencia electoral del año 2000, el PAN ganó con 15 989 636 de votos que representan el 42.52% de la votación total y 6.42 puntos porcentuales más que el entonces partido gobernante. En 2012, el PRI recupera la silla presidencial con 19 226 784 que

corresponde al 38.21% de la votación total y a una distancia de 12.8 puntos porcentuales del partido que pierde la Presidencia (PAN). En esta ocasión hubo un mayor número de votos pero menor porcentaje porque su principal contendiente fue el Movimiento Progresista.

¿Por qué este viraje? En otras palabras, ¿por qué pierde el PAN? y ¿por qué, además de la compra de votos, segmentos de electores sufragar por el PRI? Sobre la derrota de Acción Nacional, la explicación desde la teoría hoy muy generalizada del “elitismo competitivo”, es que los electores “castigan” al partido gobernante. Esta motivación teórica, que supone una evaluación del gobierno, se encuentra sobre todo entre políticos y académicos. Sin embargo, se usa también para aludir al voto que expresa el descontento de la población, su demanda de seguridad, su rechazo a “la guerra frontal contra el crimen organizado” y el clamor de justicia a los “daños colaterales” como, desde el poder, llaman a las víctimas de la estrategia gubernamental en contra del crimen organizado. Para algunos grupos de la sociedad supone, también, una exigencia de respeto a los derechos humanos.

Por otro lado, también influye la crisis que agita al PAN y obstaculiza la solidaridad con su candidata. Algunas de sus manifestaciones son la aguda competencia del proceso interno para seleccionar a su candidata(o) a la Presidencia, la deslucida campaña de Vázquez Mota, y la falta de consistencia de su equipo de campaña. Sin embargo, su mayor error radica en la falta de sensibilidad ante el problema de seguridad que priva en la sociedad y, por ende, a la principal demanda social que exige seguridad y justicia. La candidata se proclama “diferente”, y con ello se difunde la idea de que se deslinda del presidente en turno, Felipe Calderón; pero también, en su discurso, hace explícita su determinación de seguir con la estrategia de enfrentar al crimen organizado con el Ejército.

La demanda de seguridad y paz funge como meta-preferencia en la elección presidencial. Con diferentes interpretaciones y expectativas por parte de los electores, dicha demanda resta votos al PAN y los suma a la constante base electoral del PRI. En 2012, la disyuntiva PAN o PRI se da entre los votantes que tienen una segunda opción, pero que temen o rechazan una alternativa de izquierda, cualquiera sea su denominación. La expectativa de quienes eligen sufragar por el PRI es la de un gobierno federal fuerte, si es necesario con “mano dura”, que controle la situación de inseguridad que pone en riesgo permanente la vida de los ciudadanos. Sin embargo, el candidato electo en espera de ser ratificado por el TEPJF anuncia, en público, que continuará con la estrategia antes descrita. En esta cuestión, el futuro inmediato se presenta como un interrogante sin respuesta segura.

#### 4. Conflicto electoral

Hablar de la votación en favor de Andrés Manuel López Obrador nos remite a la demanda de anular la elección presidencial, que presentó la Coalición Movimiento Progresista ante el TEPJF. Una demanda semejante fue formulada por la izquierda partidaria en los anteriores comicios presidenciales de 2006. La explicación inmediata de quienes no están de acuerdo es la personalidad del candidato, el mismo en los dos comicios. Se le atribuye “obsesión por el poder”, “incapacidad de aceptar su derrota”; se le considera “manipulador de masas”, “político premoderno”; se le acusa de “imponer su liderazgo dentro de la izquierda partidaria”, y otras características de la misma índole. Sin embargo, cuando los cuestionamientos sobre la validez de las elecciones presidenciales se ubican en una trayectoria más amplia, se observa que éstos trascienden la culpabilidad de una persona, más allá de que esta visión del candidato resulta ofensiva para él, pero también para los par-



tidos que lo postulan y para sus numerosos seguidores, cuyo número se evidencia en el monto de los votos que lo favorecen, y hacen viable la aspiración de un presidente de izquierda, no tan radical como se califica a los dos con posibilidades reales: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador. En el cuadro siguiente se muestran los porcentajes de las tres fuerzas partidarias con capacidad de triunfar en los comicios presidenciales. Se resalta con negritas las fechas en que se da el conflicto, los candidatos involucrados y los porcentajes que se les reconocen.

—■ **Cuadro 1** Elecciones presidencias en México 1988 - 2012

<i>Año</i>	<i>PAN</i>	<i>PRI</i>	<i>FDN/PRD</i>	<i>Candidatos</i>
1988	16.96%	51.22%	30.89%	Cárdenas y Salinas
1994	25.92%	48.69%	16.59%	
2000	42.52%	36.11%	16.64%	
2006	35.89%	22.26%	35.31%	Calderón y AMLO
2012	25.41%	38.21%	31.59%	Peña Nieto y AMLO

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE.

Se puede observar que la controversia sobre la validez de la elección se da cuando los candidatos de la izquierda tienen posibilidades de triunfar. Cambian las personas, como se registra en la columna titulada “Candidatos” y también los partidos que rivalizan (PRI, FDN/PRD/ Movimiento Progresista en 1988 y 2012; PAN/PRD en 2006). La constante es la viabilidad de una Presidencia que cuestiona el modelo de desarrollo vigente y ofrece un proyecto alternativo.

La inquietud de muchos mexicanos es que se pretenda instaurar el comunismo o el socialismo en el país. Sin embargo, los dos líderes presidenciales han publicado por escrito sus propuestas, y en estos tex-

tos se puede comprobar que no existe “tal peligro”; tampoco buscan “volver al pasado” y menos aún sus propuestas son premodernas. Proponen priorizar las condiciones de vida de la población sin descuidar la macroeconomía. Otra cosa es que cumplan o que la situación de crisis mundial sea un obstáculo difícil de remover. Representan una expectativa para los millones de personas que viven en situación de pobreza y para los que experimentan un detrimento constante y progresivo en su capacidad económica y, por ende, en sus condiciones de vida. También representan los intereses de los agentes y las organizaciones que no se benefician con la política económica actual. En estos segmentos de la población que pertenecen a diferentes estratos sociales, se localiza el creciente número de electores que vota por los candidatos de los partidos de izquierda. Sus motivaciones no siempre son claras, pero experimentan la difícil situación del país y la inseguridad que priva. Lo viven como individuos, como familias, como gremios, como mayoría de jóvenes y de personas de la tercera edad.

Se puede observar que el cuestionamiento sobre la validez de los comicios presidenciales se inicia en 1988, al término de un sexenio caracterizado por una crisis económica y por el inicio de cambios sustanciales en el modelo de desarrollo del país y en los grupos priístas que alcanzan los altos puestos públicos, que desplazan a los denominados “políticos tradicionales”. Al nuevo modelo, que logra ser hegemónico, se le conoce, en forma imprecisa, como “neoliberal”. Por sus consecuencias en la economía familiar, por el creciente desempleo y también por sus efectos negativos en poderosos agentes económicos y políticos, se genera una polarización entre la población en general, y se hace evidente en tiempos de renovación del Poder Ejecutivo federal. Estos polos, neoliberales y antineoliberales, son los que definen, en México, a la derecha y a la izquierda; se encuentran en la base de los conflictos electorales, cuando existe la posibilidad de que, por la

vía electoral, los partidos con propuestas antineoliberales asuman la dirección del país.

## 5. El futuro inmediato

El futuro inmediato del país depende, en primera instancia, del dictamen que emita el TEPJF. La decisión de anular la elección es la menos probable. Para que se dé es indispensable una masiva e intensa demanda por parte de la sociedad y la que hay no ejerce la suficiente presión a fin de que sea atendida, porque no existen los canales adecuados para que, en este tema, la participación ciudadana sea tomada en cuenta. En caso de que la resolución sea favorable a la demanda de anulación, es necesario nombrar presidente interino y reponer los comicios presidenciales. Estas mismas consecuencias pesan en los magistrados en contra de favorecer esta opción. A reserva de revisar al detalle la demanda escrita presentada por la coalición de izquierda y de la opinión especializada de los abogados que la redactan, la posible penalización deriva de la inequidad que ocasiona la magnitud de los votos que se compraron en favor del candidato priísta, no tanto por la compra misma, porque ésta es una práctica común de los partidos políticos. Sin embargo, a pesar de su generalización, “los votos comprados” pueden ser calificados como ilegales. Si logran contabilizarse y comprobarse en términos legales, el volumen puede tener consecuencias para los partidos y para la validez de los comicios, así como para los resultados de los mismos. Si con ellos se rebasan los “topes de campaña”, la ley vigente establece la penalización correspondiente, pero anular la elección con base en la magnitud de los “votos comprados” queda a juicio de los magistrados electorales. La inercia establecida en el sistema electoral mexicano conduce a una nueva reforma electoral que resuelva sobre este asunto.

El interrogante que surge ante un dictamen que valide los comicios es: ¿cuál será la respuesta del Movimiento Progresista? No hay suficientes datos para señalar los pasos siguientes. De hecho, no es posible repetir la experiencia pasada porque las circunstancias son diferentes y muchos de los electores que sufragan por el proyecto alternativo se suman al segmento abstencionista, al perder la confianza en la vía electoral. Lo que se puede prever es una escisión entre la llamada “Nueva izquierda” y la estigmatizada “Izquierda radical”, y con ello un debilitamiento de la izquierda partidaria. Por otro lado, si prospera la demanda y en la segunda ocasión triunfa el proyecto alternativo, se abre un abanico de expectativas e interrogantes. En primer lugar, se espera una modificación en la política de desarrollo económico que combine, como la mayoría de los países desarrollados, la apertura al mercado externo con el impulso y el fortalecimiento del mercado interno, así como un fortalecimiento de la industria nacional que se beneficia de dicho mercado interno; apertura al comercio externo, a la inversión externa pero también a los inversionistas y productores mexicanos.

La restauración del régimen priísta, conformado a lo largo del siglo XX, es un temor extendido entre sus opositores. Sin embargo, es imposible volver al pasado porque son muy diferentes las condiciones económicas y políticas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y también por el proceso de cambios cualitativos que dieron fin al mencionado régimen, durante las últimas décadas (1990-2011). Algunos analistas sitúan el inicio a finales de la década de los setenta, con la reforma electoral de 1978, acontecimiento que transformó el sistema de partidos e hizo actores protagónicos a los partidos políticos. A partir de los noventa, los cambios son evidentes, así como su carácter irreversible: nuevos actores (partidos políticos) son incorporados a los gobiernos estatales, la fracción priísta deja de ser mayoritaria en la Cámara de Diputados, y con ello se rompe un eslabón importante en

la cadena de mando que sustentaba la hegemonía del Revolucionario Institucional; asimismo, se crean nuevas instituciones como el IFE, el TEPJF, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), entre otras. Tiene lugar un cambio de suma importancia que suele no considerarse: el paso de la Revolución Mexicana como “mito fundador”, al mito fundador democrático “La fuente del poder son los ciudadanos”. Se destruye así la legitimidad de la institucionalidad del Estado mexicano del siglo XX, y se establece el reto de construir una institucionalidad democrática todavía no apropiada por los líderes políticos ni por la población, sino apenas esbozada por algunas de las nuevas instituciones.

Persiste la cultura propia del régimen anterior, al igual que algunas de sus normas, prácticas y costumbres, con frecuencia ilegales y corruptas. Dada la fracción del PRI que asume la Presidencia, es posible que se incremente el grado de autoritarismo que supone siempre la vigencia de un Estado, construcción histórica, hoy por hoy necesaria por la cultura nacional y por las relaciones que prevalecen en el ámbito internacional; en este caso, un poder estatal ejercido por un gobierno fuerte y, de considerarse necesario, con “mano dura”. Responde a la demanda de segmentos de la población que espera sea el medio para lograr paz y seguridad social. Para otros es cuestión de desesperanza o de temor, sobre todo para aquellos que promueven y defienden los derechos humanos y que exigen una relación democrática entre gobernantes y gobernados. A pesar de lo anterior, no hay certeza sobre la forma en que un gobierno federal priísta enfrente el problema del crimen organizado y la falta de seguridad de los habitantes del territorio nacional. Tampoco hay certeza sobre la posibilidad de crecimiento económico, del desarrollo del país y de sus efectos en las condiciones de vida de los mexicanos. Otro interrogante es la postura del partido gobernante sobre las llamadas “reformas estructurales” y, de nueva cuenta, sobre sus efectos en las condiciones de vida de las mayorías.

El futuro inmediato es incierto, con problemas fuertes que exigen soluciones de fondo. Depende, por un lado, de las relaciones de poder entre los dirigentes políticos y entre los poderes fácticos que comparten intereses con los primeros y, por otro, de la capacidad de organización, de movilización y de participación activa de los gobernados, mexicanos y mexicanas que desean influir en las políticas públicas, en las decisiones políticas y en el rumbo que marca el “modelo de desarrollo”; éste orienta la dirección del Estado mexicano y establece la forma de participación en el proceso conocido como globalización, con su doble efecto de homogeneización y regionalización.